

Bogotá D.C; 6 de mayo de 2022

Honorables

Jueces (Reparto)

Referencia: Acción de tutela y medida cautelar urgente

Accionantes: Luz Miriam Castaño Quintero

Accionado: Sociedad de Activos Especiales SAE-SAS

Reciban un cordial saludo,

Luz Miriam Castaño Quintero, identificada como aparece al pie de mi firma respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentar acción de tutela en contra de la Sociedad de Activos Especiales por la vulneración de los derechos fundamentales la vivienda digna y al mínimo vital de personas de especial protección constitucional. Esto con base en las siguientes consideraciones:

1. Hechos

1.1 Soy madre cabeza de familia, de quien depende mi hijo en condición de discapacidad y desde hace aproximadamente quince (15) años habitó con mis tres hijos en mi vivienda en Marinilla, Antioquia. Cabe resaltar que soy una persona intachable y no tengo ningún tipo de antecedente judicial y nunca he sido sometida a ninguna investigación penal. Tampoco he contribuido de manera alguna a que en mi hogar se cometan actividades ilícitas.

1.2 El 12 de mayo de 2001 en el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 (ubicado en la Calle 21 No. 46A-89 del municipio de Marinilla, Antioquia y de propiedad de Luz Miriam Castaño Quintero) se halló 421 gramos de marihuana, los cuales habían sido comprados por uno de mis hijos, Elder Julián Toro Castaño, para el consumo personal.

1.3 Por *conservar* la sustancia prohibida sin tener la autorización de la autoridad competente, Elder Julian Toro Castaño fue declarado responsable penalmente y obligado a pagar multa por medio de la sentencia anticipada del 19 de septiembre de 2011 (Anexo 1).

1.4 Por estos hechos, el 31 de octubre de 2021, la Fiscalía General de la Nación decidió de manera oficiosa iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio de mi casa, así como su embargo y secuestro.

1.5 En consecuencia de la acción de extinción de dominio, mediante sentencia del 24 de julio de 2014 el Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de Extinción de Dominio de Antioquia resolvió no declarar la extinción del derecho de dominio sobre mi hogar (Anexo 2).

Particularmente, la sentencia relacionada señaló que las razones utilizadas por la Fiscalía para sustentar la extinción de dominio desconocen la protección de trato diferencial a una mujer cabeza de hogar. Esto en razón a que

“Por lo cual es claro que la Fiscalía no halló otro argumento diferente para atribuir negligencia y descuido a la afectada que el hecho de ausentarse durante la jornada diurna, encontrándola como responsable de faltar a la función social y ecológica que le es inherente para con su propiedad, y así mismo, con respecto al cuidado de sus hijos”.

Además, la sentencia relacionada establece que:

“De la prueba recaudada se puede concluir que si la señora Luz Miriam Castaño Quintero, ha de ausentarse del bien es precisamente en cumplimiento de su jornada laboral para así cumplir sus obligaciones que como tal su condición de madre cabeza de hogar le impone para con sus hijos garantizando su bienestar y condiciones de vida digna; por tanto, tampoco puede llegarse al extremo de considerar por un lado altruista su actuar como madre y de otro lado negligente respecto del cuidado del bien, cuando una y otra situación están íntimamente relacionados y no pueden ser valoradas aisladamente.”

1.6 No obstante, en ejercicio de facultad oficiosa de consulta, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá por medio de la sentencia con acta de aprobación del 4 de julio de 2019 decidió revocar la sentencia del 24 de julio de 2014 del Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, por lo cual se había resuelto no declarar la extinción de dominio de mi casa (Anexo 3).

1.7 Para tomar la decisión de revocar la sentencia relacionada, la Sala de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá examinó mi supuesta conducta y estableció que fui negligente e incumplí mis obligaciones como propietaria y madre, la primera al no ejercer una vigilancia de mi heredad y como madre al “descuidar” a mis hijos por tener que trabajar jornadas muy extensas:

“(…) en la medida que la necesidad de cumplir una extensa laboral no le imposibilitaba vigilar qué hacían sus hijos en especial Elder Julian, por los menos en los momentos en que compartía con ellos, bien cuando regresaba a su residencia luego del trabajo o los días martes o miércoles que descansaba.”

1.8 El Tribunal argumentó que no cumplía con las condiciones para ser considerada como madre cabeza de familia, desconociendo que yo sola tenía el deber de proveer con los recursos necesarios para la sostenibilidad de mis hijos, teniendo que cumplir con extensas jornadas laborales y a la vez velar por su cuidado, y a su vez, basado en un estereotipo¹, redujo el rol de crianza, protección, educación y afecto del padre a la simple comunicación sobre mis hijos, sin prueba suficiente lo asumió como una crianza responsable, desconociendo que la misma debe ser compartida y en términos de igualdad entre padre y madre²:

¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gutiérrez Hernández: “Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos”.

² Corte Constitucional. Sentencia T-033/2020

“Es claro entonces que la disolución del hogar, no trajo como consecuencia la ruptura de las relaciones personales entre LUZ MIRIAM y su excónyuge, por el contrario (...)se concluye que ambos mantenían comunicación respecto de las situaciones referentes a sus descendientes en común, lo que desdibuja la figura de cabeza de hogar pues, como se dijo, no existe esa <deficiencia sustancial de ayuda> exigida en la legislación que regula la materia”

1.9 Con lo anterior, se ilustra que el operador jurídico sustentó su decisión con argumentos basados en prejuicios y estereotipos de género, acentuó los patrones socioculturales sobre el deber ser de la mujer y sus roles tradicionales, reforzó con sus conclusiones las discriminaciones históricas y condiciones especiales de vulnerabilidad y desigualdad de las mujeres como yo, determinando que mi función social como mujer es ser madre y cuidadora.

1.10 Además, al imponer cargas desproporcionadas sobre mis hijos y el manejo de mi bien inmueble se evidencia que el Estado no garantizó una atención diferencial, de acuerdo con mis necesidades como sujeto de especial protección al cuidado de un niño con capacidades diversas, que requería suministro de servicios sociales para apoyar las labores de cuidado, y que al mismo tiempo, yo como mujer pudiera integrarme con más facilidad tanto a la vida laboral como a la vida familiar³.

1.11. En razón a este hecho arbitrario estoy siendo obligada, junto con mi familia, a desalojar de manera forzada mi casa, el único lugar con el que contamos para vivir.

1.12. Luego de un desgastante proceso orientado a evitar que nos desplacen de nuestro hogar, la Sociedad de Activos Especiales le entregado a mi hijo en condición de discapacidad una carta identifica con la referencia “*Solicitud de Entrega Voluntaria*” en la que se pide entregar mi casa el día 20 de marzo, so pena de iniciarse un proceso de desalojo forzado o denuncia penal (Anexo 4).

1.13. Teniendo en cuenta la condición de discapacidad de mi hijo y con el interés de obtener alguna certeza y previsibilidad sobre la fecha del desalojo, el día 28 de marzo de 2022 radique un derecho de petición dirigido a la Sociedad de Activos Especiales, solicitando los siguiente:

1. Teniendo en cuenta que el desalojo puede vulnerar la dignidad humana de una persona con especial protección del Estado, solicito a SAE -SAS se abstenga de realizar cualquier procedimiento o diligencia, hasta tanto se garanticen los derechos de mi hijo con discapacidad en la forma establecida en la Ley y la Constitución.
2. También solicito a SAE-SAS me informe si en el proceso de entrega y desalojo ha considerado la situación de mi hijo con discapacidad y si esta al tanto de la evidente injusticia que se quiere cometer contra mi familia, injusticia

³ Adicionalmente, el Tribunal desconoció la normativa relativa a los derechos de las mujeres, en materia internacional desarrollada con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Jurisprudencia del Sistema Regional de protección de los Derechos Humanos y jurisprudencia interna sobre especial protección a los derechos de las mujeres.

que puede evidenciarse con la simple lectura de la sentencia de extinción de dominio.

3. Solicito a SAE-SAS me informe cuales son las etapas y procedimientos que va adelantar para lograr el desalojo forzado de mi casa y cuando serán adelantados estos procedimientos.
4. Solicito a SAE-SAS me informe que derechos tengo frente a la entrega y desalojo de mi casa (Anexo 5).

1.14. El día 5 de mayo de 2022, la Sociedad de Activos Especiales dio respuesta al derecho de petición señalando que el desalojo se realizará el día 10 de mayo de 2022, es decir apenas 5 días antes del desalojo forzado. Al respecto de la respuesta dada cabe resaltar que nos tomó por sorpresa y no tenemos adonde ir, ni tenemos redes de apoyo (Anexo 5).

1.15. Sumado a lo anterior, atravesamos por una situación económica crítica, con mínimos ingresos económicos, situación que se ha agravado con la declaración de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19 desde el año 2020 y que debe despertar su responsabilidad social.

2. Consideraciones de derecho

2.1.1 Jurisdicción y competencia

Atendiendo a las reglas de reparto de la acción de tutela por factor de jurisdicción y competencia, recogidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, son los Jueces del Circuito los competentes para conocer del presente asunto. Así lo dispone la norma:

“ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. REPARTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(...)

3. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.”.

Esto teniendo en cuenta que la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS es una sociedad de economía mixta del *orden nacional* que de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014 administra la cuenta del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO. Además, según lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, el administrador de FRISCO tendrá la facultad de policía administrativa para la recuperación física de los bienes que se encuentren bajo su administración.

2.1.2 Cuestiones de admisibilidad

De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la CP y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, el juicio de admisibilidad implica valorar la procedencia de la acción de tutela, lo que incluye examinar si se satisfacen los criterios de subsidiaridad e inmediatez y si ha acontecido carencia actual de objeto o el daño consumado.

Al respecto de la subsidiariedad de la acción de tutela, en el caso en concreto no existen otros mecanismos de defensa judicial para proteger los derechos fundamentales de la señora Luz Miriam Castaño Quintero y su familia. Esto teniendo en cuenta que la respuesta del 5 de mayo de 2022 se expresa la voluntad irrevocable de realizar el desalojo el día 10 de mayo de 2022. Además, respecto al criterio de inmediatez, es relevante tener en cuenta que la amenaza de los derechos fundamentales es inminente y se concretará el día del desalojo forzado.

Teniendo en cuenta que la obligación del juez de realizar el juicio de procedibilidad de la acción de tutela, implica analizar si el afectado pertenece a algunas de los grupos considerados como sujetos de especial protección constitucional, es necesario reconocer que Luz Miriam Castaño Quintero ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos de forma continua, siendo reconocido su núcleo familiar como víctima de desplazamiento forzado en el conflicto armado y acreditada como víctima de crímenes de lesa humanidad en el Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, conforme con el certificado de discapacidad, mi hijo Jonatan Toro Castaño registra una discapacidad física y mental global del 77.67% (Anexo 6). Asimismo, dada la condición de pobreza y exclusión social, mi familia y yo nos encontramos en una situación de debilidad manifiesta que obliga al Estado adoptar medidas diferenciales orientadas a hacer efectivo el acceso a la justicia.

2.2 Sobre la vulneración de derechos

De conformidad con los antecedentes expuestos, la justicia deberá resolver si la Sociedad de Activos Especiales violó el derecho a la vivienda y al mínimo vital de Luz Miriam Castaño Quintero y su familia al comunicar sobre la decisión de desalojar nuestro hogar, lugar que he ocupado por espacio de (15) años como vivienda con mis tres hijos, de los cuales uno se encuentra en condición de discapacidad.

2.2.1 Garantías de derechos humanos para el desarrollo de desalojos forzados

El derecho a la vivienda digna se encuentra previsto en el artículo 51 de la Constitución y en diferentes tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, se consagra el derecho a la vivienda digna. La Convención Americana sobre Derechos Humanos realiza en su artículo 26 un reenvío a la Carta de la Organización de Estados Americanos que establece en su artículo 34 k), la obligación de los Estados partes de garantizar “*vivienda adecuada para todos los sectores de la población*”. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Este derecho también se encuentra previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (art. XI).

Una de las maneras en que el derecho de los derechos humanos ha protegido el derecho a la vivienda digna, es a través de las garantías establecidas para el desarrollo de desalojos forzados. De esta manera, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se encuentran prohibidos los desalojos forzados de poblaciones vulnerables, cuando no se le otorga alternativas para su reasentamiento.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Observación General Número 7 ha establecido los estándares que deben seguir los Estados partes, cuando adelantan desalojos forzosos, en su jurisdicción, así:

“a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”.

Asimismo, según la Observación General citada, los desalojos forzosos no pueden dar lugar a que existan personas que se queden sin vivienda con posterioridad al desalojo. Además, en casos en que *las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos*, el Estado debe adoptar medidas especiales para proteger a estos grupos.

La observación general referenciada ha sido aplicada por la Corte Constitucional en los casos en los cuales se debate el desalojo forzoso de sujetos de especial protección constitucional a los que no se les había ofrecido una alternativa de reasentamiento.

Así en la sentencia T-075/12, en la cual se debatía el desalojo forzoso de los peticionarios de un bien de uso público estableció con fundamento, en dicho documento que para resolver el caso se debía tener en cuenta: (i) el respeto de todas las garantías procesales previstas ya citada; (ii) garantizar una vivienda adecuada con posterioridad al desalojo; y (iii) proteger especialmente a la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Además, la Corte Constitucional ha revisado la constitucionalidad de medidas policivas que implican el desalojo. Así, en la sentencia C-241 de 2010 señaló sobre el alcance de las facultades de policía administrativa que, con fundamento en el principio de proporcionalidad, las medidas policivas de desalojo deben garantizar unos mínimos, que incluyen (i) prevenir que las personas que serán desalojadas se queden sin vivienda por lo cual se deben adoptar medidas para garantizarles una vivienda adecuada con posterioridad

al desalojo, (ii) garantizar la protección especial de sujetos que están en condiciones de vulnerabilidad como los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad. En esa misma perspectiva la sentencia C-813 de 2014 al estudiar las facultades de policía relacionadas determinó que debían someterse a las garantías mencionadas para el desarrollo del desalojo.

Así las cosas, la audiencia de desalojo forzado que adelantará el SAE el próximo 10 de mayo de 2022 amenaza los estándares establecidos por el derecho de los derechos humanos. Esto en razón a que no se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Observación General Número 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Tampoco las autoridades estatales han ofrecido alternativas para nuestra reubicación, ni se han tomado medidas diferenciales para proteger especialmente a mi hijo con discapacidad y mis derechos como mujer cabeza de hogar.

2.2.2 Doctrina constitucional y obligatoriedad del precedente de la Corte Constitucional

Con la Constitución de 1991 y las decisiones de la Corte Constitucional se ha establecido un sistema que le otorga la fuerza al precedente judicial de la tutela, denominado doctrina constitucional. Esto reconociendo la función unificadora de las altas Cortes y la función de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución y con fundamento en el derecho a la igualdad, seguridad jurídica, el principio de buena fé y confianza legítima.

La Corte Constitucional ha protegido el derecho a la vivienda digna en casos en los cuales una autoridad de policía ha ordenado el desalojo de bienes de uso público o de carácter fiscal y que son habitados por personas que no tienen recurso para acceder a una solución de vivienda. También, en algunos casos la Corte ha protegido a personas a quienes se les ordenaba el desalojo de bienes estatales usados como vivienda con fundamento en el principio de confianza legítima.

La sentencia T-075/11 estudió la tutela de un hombre de 63 años que vivía en espacio público y que considero que la ejecución de la orden de desalojo inmediata y sin la adopción de medidas alternativas para la reubicación definitiva, implicaría la afectación directa de su derecho a la vivienda digna. Esta situación sería especialmente lesiva, pues el actor goza de una especial protección constitucional, en tanto actualmente cuenta con 63 años de edad.

También, la sentencia T-556 de 2011 estudió una tutela de una persona que no contaba con ingresos fijos y estaba obligada a desalojar un predio de propiedad estatal que ocupaba hace 30 años. Al respecto la Sala concluyó respecto del peticionario: *“que su derecho a la vivienda digna es desconocido cada vez que el municipio le exige que desaloje el espacio que ha habitado durante todo este tiempo, sin ofrecerle a una persona en sus condiciones una alternativa viable de vivienda, que le garantice condiciones dignas”*. Con fundamento en estas consideraciones este Tribunal le ordenó a la alcaldía del municipio que se abstuviera de desalojar al peticionario del lugar dónde ha vivido, hasta que pueda proveerse una vivienda con similares o mejores condiciones de la que tenía.

Reconociendo que el principio de confianza legítima es una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares, partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del Estado⁴, en la sentencia T-527/11 estudió la tutela de un grupo de personas a las que se les había ordenado desalojar de manera inmediata un bien de uso público, en el que habitan desde hace 10 años. En este caso la Corte Constitucional consideró que, si bien era un deber del estado recuperar el espacio público, en aplicación del principio de confianza legítima, los ocupantes tienen derecho a que se les otorgue un tiempo para que se mitiguen los efectos del desalojo y a que se les ofrezcan alternativas para su reubicación.

También, la sentencia T-617/95 estudió el caso de numerosas personas que residían a las orillas de la carrilera de un ferrocarril en Bogotá, por lo que la administración municipal de forma repentina buscó el desalojo del espacio público sin ningún tipo de plan de choque que garantizara el respeto de los derechos fundamentales de los implicados, lo que llevó a que en el asunto concreto se ponderó el principio de la confianza legítima.

En el caso concreto la ejecución de la orden de desalojo inmediata y sin la adopción de medidas alternativas para la reubicación definitiva, implicaría la afectación directa de su derecho a la vivienda digna y al mínimo vital. Esta situación sería especialmente lesiva, pues gozamos de una especial protección constitucional, en tanto actualmente soy madre cabeza de hogar de quien depende mi hijo con discapacidad. Asimismo, con base en el principio de confianza legítima, tengo derecho a que se otorgue un tiempo para que se mitiguen los efectos del desalojo y a que se me ofrezca alternativas para mi reubicación y la de mi familia.

3. Medida provisional

A partir de lo reglado en el artículo 7 del decreto reglamentario 2591 de 1991, solicito se tomen medidas para evitar que los derechos en amenaza y vulnerados acá mencionados, sean protegidos desde los primeros momentos de estudio de esta acción; y que la amenaza y violación a estos derechos no se vea consumada con la realización de la diligencia de desalojo forzado el día 10 de mayo de 2022.

En este sentido, solicitó al juez de tutela que tome la medida provisional de suspensión de la diligencia con fundamento en las garantías establecidas en el derecho de los derechos humanos para el desarrollo de los desalojos forzados.

En particular, la medida provisional de suspensión de la diligencia permite hacer efectivo el derecho a tener una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas por el desalojo; a un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo y a facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos.

⁴ Corte Constitucional, sentencia T-472 de 2009

Lo anterior, teniendo en cuenta que fuimos informados con certeza de la realización de la diligencia de desalojo el día 5 de mayo de 2022, es decir apenas 5 días antes de la diligencia, lo que constituye un plazo insuficiente e irrazonable para ser notificados e informarnos. Asimismo, dado que el aviso de entrega voluntaria se realizó con mi hijo en condición de discapacidad se considera que no ha existido una auténtica oportunidad para consultar a las personas afectadas.

4. Pretensiones:

Por las anteriores consideraciones, estoy legitimada para exigir que como condición a la entrega voluntaria y desalojo de mi vivienda se garanticen mis derechos y en especial los derechos especialmente reconocidos a mi hijo con discapacidad. Por ello, solicitó

TUTELAR los derechos fundamentales a la vivienda en condiciones dignas y al respeto de la confianza legítima del accionante y familia y en consecuencia ordene:

PROTEGER especialmente a la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad en particular a mi como madre cabeza de hogar y a mi hijo Jonatan Toro Castaño, quien depende de mí.

ORDENAR a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS el respeto de todas las garantías procesales previstas en el derecho de los derechos humanos, incluyendo:

“a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”.

ORDENAR a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS suspender la diligencia de desalojo y el procedimiento hasta tanto se garanticen las medidas para proteger los derechos de mi hijo en condición con discapacidad y mis derechos como mujer cabeza hogar.

5. Pruebas y anexos

i) Sentencia del 19 de septiembre de 2011 del Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, en contra de Elder Julián Toro Castaño.

- ii) Sentencia del 24 de julio de 2014 del Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de Extinción de Dominio de Antioquia resolvió no declarar la extinción del derecho de dominio
- iii) Sentencia con acta de aprobación del 4 de julio de 2019 Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá
- iv) Derecho de petición del 28 de marzo de 2022 dirigido a la Sociedad de Activos Especiales.
- v) Certificado de discapacidad física y mental de Jonatan Toro Castaño.
- vi) Respuesta derecho de petición del 5 de mayo de 2022 de la Sociedad de Activos Especiales y anexo Resolución 452 de 2022.

6. Juramento

Bajo la gravedad del juramento me permito manifestar que por los mismos hechos y derechos vulnerados no se ha presentado acción de tutela ante otro despacho judicial

7. Notificaciones

Como accionante recibiré notificaciones en la Cl 21 #46ª-89, ciudadela artesanal, Marinilla Antioquía. También en el correo electrónico milly73@hotmail.com y en el celular 3197615063.

Respecto al accionado la sociedad tiene los siguientes datos de notificación Dirección: Calle 93B No. 13 - 47 Bogotá D.C., Colombia y correo de notificaciones judiciales: notificacionjuridica@saesas.gov.co

Cordialmente,



Luz Miriam Castaño Quintero
c.c 43.449.476